**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CINCUENTA Y SIETE CIVIL MUNICIPAL**

Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinte (2020)

ACCIÓN DE TUTELA No. 11001 40 03 057 2020 00635 00

Cumplido el trámite de rigor procede el Despacho a proferir la sentencia que en derecho corresponda.

ANTECEDENTES

1. El señor José Teclo Bejarano, a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra la Secretaría de Movilidad y la sociedad Transmilenio S.A representada legalmente por el señor Felipe Andrés Augusto Ramírez Buitrago, manifestando vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, trabajo y propiedad privada.

2. Como elementos fácticos de su accionar, en esencia adujo, que el 28 de enero de 1997 adquirió el vehículo de placas SAG-654 modelo 1972, tipo bus, con tarjeta de operación N. 701286 con vida útil hasta el 31 de diciembre de 2005 mediante contrato de compraventa, afiliado a la Empresa Transportes Bermúdez S.A.

2.1. Vehículo que fue desvinculado por cumplimiento de vida útil, por lo tanto, y en consecuencia de lo establecido en el Decreto 2556 de 2001, tenía un año para hacer uso del derecho a la reposición, del cual no pudo hacer uso, como quiera que el automotor estaba inmerso en el proceso judicial que se adelantaba en el Juzgado 23 Civil Municipal de Bogotá.

2.2. Hasta el año 2011 logró legalizar el vehículo colocándolo a su nombre, seguidamente, lo postuló en diferentes ocasiones al Fondo de Mejoramiento de la Calidad del Servicio (Decreto 115 del 13 de abril de 2003).

2.3. El 25 de abril de 2012 aceptó la propuesta del citado Fondo que le ofreció para vender el bien (placas SAG-654), por la suma de \$48.466.624, donde en su momento autorizó a la Fiduciaria Corfincolombiana S.A., para que realizara en su nombre los trámites necesarios para el saneamiento del automotor, el cual fue aprobado para la compra el 14 de mayo de 2012, con la anotación de que *“..si (...) no firmaba el contrato en un determinado tiempo no podía exigir la compra del vehículo en fechas posteriores”*, sin embargo, no pudo sufragar los gastos que le correspondían para acceder a dicho negocio, no obstante, para el mes de julio de dicho año (2012) logró conseguir el presupuesto para sanear el carro, pero la Fiduciaria se negó a la compra alegando que el carro no se encontraba en el listado de vehículos con derecho de reposición para el año 2009.

2.4. Por derechos de petición radicados ante la mencionada Fiduciaria y la Secretaría accionada solicitó que incorporaran el vehículo al archivo magnético y físico de la Secretaría de Movilidad, sin embargo, ésta última, negó dicho requerimiento.

2.5. Por derecho de petición calendado 3 de febrero de 2015, solicitó a la Secretaría encartada que el vehículo de placas SAF-654 fuera objeto de compra para chatarrización por parte del Fondo de Mejoramiento de Calidad de Servicios, frente a lo cual, le indicaron que las disposiciones vigentes no le permiten autorizar la compra del automotor.

2.6. En el mes de octubre de 2019, solicitó a la Secretaría encartada que tuviera en cuenta el vehículo dentro de los adquiribles para el Fondo del Mejoramiento de la Calidad del Servicio, frente a lo cual le indicaron *“...esta entidad ya ha dado respuesta a varias peticiones que con la misma pretensión se han presentado de su parte; como evidencia de lo aquí manifestado, se remite copia de los siguientes oficios: DCV-125144-14 y DCV-23770-15. Como consecuencia, esta dependencia considera que a su solicitud ya ha sido respondida”*.

2.7. El 5 de mayo de 2020, solicitó a la mencionada entidad, que procediera a aceptar, ejecutar y efectuar la reposición o la inclusión del vehículo de placas SASG-654 a los adquiribles para la reposición y/o saneamiento de buses articulados o biarticulados de Transmilenio, operadores del SITP para compra o renta según el caso, o para compra por medio del Fondo del Mejoramiento de la Calidad del Servicio o que lo incluyera en el listado de vehículos con derecho a reposición a julio 2009, ante lo cual, le indicaron *“...Considera esta Secretaria haber resuelto de fondo el requerimiento del peticionario; reiterando que a partir de la entrada en vigencia del Decreto 309, en junio de 2009, fecha de implementación del SITP en que se ordenó la destinación de los recursos disponibles del Factor del Servicio para la compra de vehículos del entonces actual transporte público colectivo; como es sabido, el vehículo del peticionario, no pertenecía, igual que no pertenece ahora, al parque automotor opcionado para ser adquirido mediante compra con los recursos disponibles del Factor de Calidad del Servicio y por tal razón la administración salvo disposición judicial en contrario, se encuentra obligada a denegar la petición”*.

2.8. Las accionadas no han realizado la correspondiente indemnización plena y previa a los transportadores que previo a la entrada de la empresa Transmilenio S.A. y SITP en Bogotá ejercían la actividad económica lícita de transportador, mediante el vehículo de servicio público, y a pesar de ser un mandato de rango constitucional hoy en día (año 2020) *“...se encuentra en una situación desesperada por hacer cumplir la norma de normas del Estado Colombiano, con el único fin de que se autorice la REPOSICIÓN de su vehículo o en su defecto se le permita la inclusión del vehículo a los adquiribles para saneamiento de buses articulado o biarticulados de Transmilenio S.A. operados del SIPT para compra o renta según el caso o para compra por medio del FONDO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO”*, vulnerando los derechos del accionante.

2.9. Incoa la presente acción con el fin de evitar un perjuicio irremediable, pues acudir a otros medios de defensa como lo es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho o acción de reparación directa ante el Contencioso Administrativo, es someterse a un trámite dilatorio que llevaría años y dinero convertido en horarios que actualmente no posee.

3. Pretende a través de esta queja el amparo de las prerrogativas invocadas, y que se ordena a las entidades encartadas que: **i)** autoricen la reposición del rodante de placas SAG-654 y, **ii)** la adquisición de los derechos de reposición del automotor de placas SAG-654 para su reposición o cuota de chatarra.

Aunado a lo anterior, que se declare que las entidades encartadas al negar la incorporación del vehículo de placas SAG-654 en el listado de adquiribles para factor de calidad Transmilenio SITP vulnera los artículos 13, 29, 25 y 58 de la Constitución Política de Colombia.

4. Por auto del 15 de octubre de los cursantes se admitió la acción de tutela, y se ordenó la notificación de las accionadas.

5. La **EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO – TRANSMILENIO S.A.**, al descender el traslado solicitó su desvinculación como quiera que no ha adelantado ninguna actuación administrativa en contra del accionante, más aún cuando los hechos generadores de esta acción corresponden directamente a un actuar de la Secretaria Distrital de Movilidad además de ser la encargada y responsable del Fondo de Mejoramiento en la Calidad del Servicio – Factor de Calidad y quien es la entidad competente para determinar cuáles vehículos tienen derecho de participación en el SITP, sin que tenga competencia directa para determinar si el propietario tiene o no derecho de participación y reconocimiento en el SITP, y tampoco define la compra o no del vehículo por parte del factor de calidad.

Aunado a lo anterior, señala que de las pruebas relacionadas en la acción de tutela el vehículo colectivo de placas SAG 654 fue desvinculado el 31 de diciembre de 2005, por tanto el accionante contaba con un año para presentar la solicitud de inclusión en el listado de adquiribles para reposición, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2006., sin embargo, y teniendo en cuenta que por problemas atribuibles al propietario del vehículo, el mismo no pudo ser incluido en el listado de adquiribles para reposición renta o venta por parte de SITP.

Agrega que la respuesta emitida por la autoridad de tránsito es un acto administrativo sujeto a control de legalidad a través de la acción de nulidad y nulidad de restablecimiento del derecho, y el hecho de que el accionante no las controvirtiera ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa no justifica ningún argumento que fundamente los cargos contra el derecho del debido proceso.

6. La **SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD** a contestar el libelo señaló lo siguiente:

6.1. Existe improcedencia de la acción de tutela por cuanto el accionante no agotó los mecanismos subsidiarios para obtener el amparo de sus derechos que por esta vía se invocan.

6.2. El rodante de placa SAG-654 es de propiedad del señor José Tecló Bejarano desde el 16 de marzo de 2012, el cual de cara a lo previsto en el artículo 84 del Decreto 1797 de 1990, según la anotación en el R.D.A y el Certificado de Tradición y Libertad del mencionado bien se encuentra sin empresa vinculadora porque fue desvinculado por vida útil conforme el Decreto 2556 de 2001.

6.3. En línea de lo previsto en el artículo 1 del Decreto 2556 de 2001, todo los vehículos que habían cumplido o cumplieran el ciclo de vida útil de acuerdo con las reglamentaciones de Ley, tenían hasta el 15 de diciembre de 2005 para realizar la reposición del automotor, es decir, que dicho artículo extendió el plazo para que todos los vehículos que, aunque fenecidos con su vida útil en años anteriores no habían realizado el procedimiento de reposición, finiquitaran el mismo, concediendo más de cuatro años para el efecto, por lo anterior, “...se *podría pensar*” que la norma extendió la vida útil hasta el 15 de diciembre de 2005, pero esto sólo para efectos de reposición, ya que la prestación del servicio de transporte seguía siendo de 20 años, que fue el caso del vehículo de placas SAG-654 pues una vez vencido el plazo (15 de diciembre de 2005), se registró que había fenecido su vida útil en sus características.

6.4. El vehículo de placa SAG654 tuvo derecho a reposición en virtud del Decreto 2556 de 2001 hasta el 15 de diciembre de 2005, por lo cual, a la entrada en vigencia del SITP, año 2009, no contaba con la atribución para ser incluido en la lista de elegibles para la compra por parte del Fondo de Mejoramiento para el Factor de la Calidad del Servicio.

6.5. No existe vulneración alguna a las prerrogativas del petente por cuanto el ciudadano no tiene derecho para realizar la reposición o postulación de su carro para la compra en el Fondo de Mejoramiento para la Calidad del Servicios, puesto que sólo tenía hasta el 15 de diciembre para realizar la reposición.

6.6. El proceso de postulación para la compra al Fondo de Mejoramiento del Factor de Calidad del Servicio, se realizó con miras de reducir la sobreoferta de vehículos que a la entrada del SITP en Bogotá estaban prestando el servicio, por lo cual, los reglamentos y normatividades aplicables establecieron que a la lista de elegibles para la compra solo podían ingresar los rodantes que contaban con derecho de reposición vigente a 2009, situación que no es la del caso del carro de propiedad del accionante. Información que puso en conocimiento de petente a través de diferentes comunicaciones.

6.7. El trámite de reposición y el de postulación a la compra de vehículos por parte del Fondo de Mejoramiento del Factor de Calidad del Servicio, no requiere contradicción, ya que son trámites en los que media una petición y verifica el cumplimiento de unos requisitos para aprobar el acceso o no a él, sin embargo, el ciudadano cuenta con la herramienta del derecho de petición, que aquel ejerció constantemente, además, le resolvió oportunamente sus solicitudes, cosa distinta es que el actor no tenga derecho actualmente a acceder a la reposición del vehículo

de placas SAG654, así como tampoco a la inclusión en la lista de elegibles para la compra por parte del Fondo de Mejoramiento del Factor de Calidad del Servicio.

CONSIDERACIONES

1. Como lo señala la Corte Constitucional “...Conforme al artículo 86 de la Carta, la acción de tutela ésta revestida de un carácter subsidiario (...) que puede ser utilizada ante la vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando: i) no exista otro medio judicial a través del cual se pueda reclamar la protección de los derechos, ii) cuando existiendo otras acciones, éstas no resultan idóneas para la protección de los derechos de que se trate, o iii) cuando existiendo acciones ordinarias, la tutela se use como mecanismo transitorio para evitar que ocurra un perjuicio irremediable de naturaleza iusfundamental.”. Es decir, siempre que exista otro medio judicial que garantice la eficacia de la protección de los derechos del tutelante, deberá acudir a estos y no a la acción de tutela (Sentencia SU- 772/14).

Si bien es cierto la acción de tutela busca la protección de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por la acción u omisión de la autoridad pública, esta también procede contra las acciones u omisiones de los particulares en tres situaciones específicas: i) preste un servicio público, ii) exista una relación que implique subordinación o indefensión, iii) la conducta del particular afecta grave y directamente el interés colectivo.¹

2. La jurisprudencia constitucional ha determinado que el derecho a la **igualdad** es un concepto multidimensional, reconocido como un principio, un derecho fundamental y una garantía, de esta manera, la igualdad puede entenderse a partir de tres dimensiones: i) formal, lo que implica que la legalidad debe ser aplicada en condiciones de igualdad a todos los sujetos contra quienes se dirige; y, ii) material, en el sentido garantizar la paridad de oportunidades entre los individuos; y, iii) la prohibición de discriminación que implica que el Estado y los particulares no puedan aplicar un trato diferente a partir de criterios sospechosos construidos con fundamento en razones de sexo, raza, origen étnico, identidad de género, religión y opinión política, entre otras. (sentencia T-030 de 2017)

3. Frente al **debido proceso** el artículo 29 de la Constitución Política, señala que, “...se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas

¹ Así lo tiene más que decantado la Corte Constitucional en varios de sus pronunciamientos cómo son las sentencias T-421/2017, T- 4307/2017, T-117/2018, entre otras.

y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.

3. En cuanto al **derecho al trabajo** invocado con conculcado, en sentencia C-593 de 2014 se estableció que la protección constitucional de este derecho, involucra el ejercicio de la actividad productiva tanto del empresario como la del trabajador o del servidor público, no está circunscrita exclusivamente al derecho a acceder a un empleo sino que, por el contrario, es más amplia e incluye, entre otras, la facultad subjetiva para trabajar en condiciones dignas, para ejercer una labor conforme a los principios mínimos que rigen las relaciones laborales y a obtener la contraprestación acorde con la cantidad y calidad de la labor desempeñada. Protección que se establece desde el preámbulo mismo la carta magna como principio fundante junto con la vida, la convivencia, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, del Estado Social de Derecho.

4. En sentencia T-413 de 1997, La Corte Constitucional dijo que el derecho a la **propiedad privada** no es un derecho fundamental que merezca la protección que ofrece la acción de tutela, dejando en claro que solo será viable dicha protección cuando se evidencie la conexidad con derechos que por naturaleza son fundamentales.

EN EL CASO CONCRETO

El accionante invoca la protección de sus derechos fundamentales con el fin de obtener por parte de la Secretaría de Movilidad la autorización de la reposición del rodante de placas SAG-654, y la adquisición de los derechos de reposición del mencionado automotor para su reposición o cuota de chatarra.

Aunado a lo anterior, solicita que se declare que las entidades encartadas al negar la incorporación del vehículo de placas SAG-654 en el listado de adquiribles para factor de calidad Transmilenio SITP vulnera los artículos 13, 29, 25 y 58 de la Constitución Política de Colombia.

Frente al principio de inmediatez

Primeramente, ha de advertirse que la queja Constitucional no se propuso de manera tempestiva, teniendo en cuenta que los hechos que sirvieron de base para la presente acción, según los fundamentos fácticos expuestos en ella, datan del año 2015, fecha en la cual, la Secretaría Distrital de Movilidad mediante radicado del 27 de febrero de 2015 le informó al señor Bejarano que la normativa vigente no le permitía autorizar la compra del automotor de placas SAG-654 por parte del Fondo para el Mejoramiento de la Calidad del Servicio, como quiera que el derecho de reposición en la modalidad de público colectivo (TPC) utilizado como cuota de vinculación con operaciones adjudicatarios de zonas del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) o de adquisición a través de las sociedades fiduciarias habilitadas para el manejo de los recursos del Factor Calidad, para esa época solo

regían para los vehículos del TPO (sic) con derecho de reposición vigente a julio del año 2009, en tanto que la acción Constitucional se impetró el 14 de octubre de 2020, según Acta Individual de Reparto, es decir, aproximadamente transcurridos **casi cinco (5) años**, lo que deriva en su falta de inmediatez, habida cuenta que aquella debe ejercitarse tan pronto ocurre la vulneración o amenaza al derecho fundamental, pues de lo contrario se desvirtúa el carácter inmediato del amparo.²

En ese sentido, y como quiera que el accionante considera que la afectación a sus derechos a la igualdad, debido proceso, trabajo y propiedad privada, se derivan de la negativa por parte de las entidades encartadas en cuanto a efectuar la reposición del rodante de placas SAG-654 e incluirlo en el listado de adquiribles para factor de calidad Transmilenio SITP, no ha debido esperar más de cinco (5) años para procurar que sus derechos fueran amparados, precisamente, porque este transcurso de tiempo pone en entredicho la urgencia de la salvaguarda pretendida, descartando la vulneración inmediata e inminente de lo petitionado.

Subsidiaridad

Este requisito no se cumple, por cuanto, a la interposición de este trámite preferente, el petente aún contaba con los mecanismos ordinarios para obtener el amparo deprecado, pues fíjese que, aunque se arguya por parte del querellante que al acudir a otros medios de defensa como lo es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es someterse a “vejamen” de un trámite dilatorio que llevaría años y dinero convertido en honorarios que actualmente no posee, no es óbice para desconocer las vías alternas a este trámite preferente, más aún cuando no se probó, señaló o determinó de qué manera no son idóneos para obtener la guarda de sus pedimentos a través de ellos, siendo improcedente desconocerse dichas alternativas³ ni pretender que el Juez

² Corte Suprema de Justicia, Sentencia de Tutela del quince (15) de julio de dos mil nueve (2009). Radicado No. 11001-02-03-000-2009-00955-00 “... Tal conclusión no responde a un parecer arbitrario de esta Sala; por el contrario, coincide con la posición que sobre el tema ha fijado la jurisprudencia constitucional y la doctrina nacional. En efecto, a pesar de la desaparición del término de caducidad de dos meses que el art. 11 del Dec. 2591 de 1991 había señalado para ejercer la acción de tutela, declarado inexecutable por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ello se ha entendido ‘Que si bien no existe un término límite para el ejercicio de la acción, de todas formas, por la naturaleza, el objeto de protección y la finalidad de este mecanismo de defensa judicial, la presentación de la acción de tutela debe realizarse dentro de un término razonable, que permita la protección inmediata del derecho fundamental a que se refiere el artículo 86 de la Carta Política. Por lo tanto, resultará improcedente la acción de tutela por la inobservancia del principio de la inmediatez que debe caracterizar su ejercicio. La restricción tiene como finalidad preservar el carácter expedito de la tutela para la protección de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acción u omisión de la autoridad pública’. (Sentencia T-797/02 de 26 de septiembre de 2002.) Tal entendimiento coincide con la nota de inmediatez que el art. 86 de la Carta Política señala como finalidad del ejercicio de esta acción, de manera que aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercanía en el tiempo con el ejercicio de la acción, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanción por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicción para reclamar tal protección (...) Así las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostró, ni invocó siquiera, justificación de tal demora por el accionante”. – Resalta el Despacho-.

³ Sentencia T-471 de 2017 “...en las sentencias T-373 de 2015 y T-630 de 2015, estableció que, si existen otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, el afectado debe agotarlos de forma principal y no utilizar directamente la acción de tutela. En consecuencia, una persona que acude a la administración de justicia con

Constitucional adopte decisiones paralelas a las del funcionario que debe conocer del asunto dentro del marco estructural de la administración de justicia como lo es discutir los diferentes pronunciamientos por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad, que pueden ser objeto de reparo ante las instancias pertinentes, siendo inviable su análisis por esta vía sumaria y preferente.

Aunado a lo anterior, La Corte Constitucional en un caso similar concluyó *“...Teniendo en cuenta lo anterior, para esta Sala de Revisión es clara la improcedencia de la presente tutela para resolver las situaciones expuestas, dado que en se plantea una discusión que debe ser resuelta por el juez competente y no por el juez constitucional, pues la pretensión de los accionantes va dirigida a materializar un derecho legal, que consiste en obtener la reposición de los vehículos de servicio público sobre los cuales manifestaron tener derecho, es decir que se trata de una discusión legal que no involucra derechos constitucionales”*. – Resalta el Despacho- (sentencia T-568 de 2012).

Ahora bien, en cuanto a que se incoa directamente esta acción porque no puede someterse a un proceso dispendioso y además, porque no cuenta con el dinero para costear los honorarios de un abogado, no son argumentos para que esta vía se abra paso de manera favorable, pues téngase en cuenta que no se señaló que el estado de salud del accionante irroque una situación que le impida la espera de un proceso ordinario, por ejemplo, una enfermedad catastrófica, pese a que se haya aportado copia de la historia clínica – en la cual se evidencia la atención médica de su patología (página 46)- no se advierte que actualmente existe una restricción médica que ponga en riesgo su vida, su salud o integridad, o que la falta de recursos sea un obstáculo para incoar los trámites pertinentes, pues el mismo Estado, a través de la Defensoría del Pueblo, prevé el acceso a la Justicia de las personas que no tienen posibilidad económica y social de proveer por sí mismos la defensa de sus derechos para asumir su representación judicial o extrajudicial, auxilio que se otorga en línea de lo previsto en el Decreto 25 de 2014, más aún, cuando el Consejo Superior de la Judicatura – Presidencia mediante Acuerdo PCSJA 20-11567 del 5 de junio de 2020 dispuso entre otros, el levantamiento de la suspensión de términos judiciales a partir del 1 de julio hogaño.

En cuanto a este tema, en sentencia T-177 de 2011 la citada Corporación señaló: *“Frente a la necesidad de preservar el principio de subsidiariedad de la acción de tutela, se ha sostenido que aquella es improcedente si quien ha tenido a su disposición las vías judiciales ordinarias de defensa, no las utiliza ni oportuna ni adecuadamente, acudiendo en su lugar a la acción constitucional. Ello por cuanto que, a la luz de la jurisprudencia pertinente, los recursos judiciales ordinarios son verdaderas herramientas de protección de los derechos fundamentales, por lo que deben usarse oportunamente para garantizar su*

el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que debe conocer del asunto dentro del marco estructural de la administración de justicia”.

vigencia, so pena de convertir en improcedente el mecanismo subsidiario que ofrece el artículo 86 superior.”

Frente a los derechos del debido proceso, trabajo, igualdad y propiedad privada

El Despacho no advierte quebrantamiento alguno a las mencionadas prerrogativas, por cuanto, la situación que actualmente se irroga como generador de quebrantamiento del debido por parte de la Secretaría encartada es que a la fecha de la presentación de la demanda constitucional no ha autorizado la reposición del rodante de placas SAG-654, y la adquisición de los derechos de reposición del mencionado automotor para su reposición o cuota de chatarra, no se debe a un actuar contrario de las normas legales por parte de la Secretaría accionada, sino a que el actor no hizo uso del derecho de reposición consagrado en el artículo 1 del Decreto 2556 de 2001,⁴ situación que le fue explicada por la autoridad de tránsito en diferentes respuestas a los derechos de petición incoados por el petente en los años 2015, 2019 y 2020, ahora bien no se puede endilgar vulneración de dicha prerrogativa basada en los hechos de que no hizo uso de la reposición en aquella data (año 2005) porque el automotor estaba inmerso en un proceso que se adelantaba en el Juzgado 23 Civil Municipal de Bogotá, pues la norma es clara en el término establecido para incoar la misma, ahora bien, de igual manera se observa que tuvo la oportunidad de que el bien fuese comprado por el Fondo para el Mejoramiento de la Calidad del Servicio y Reducción del Índice de Sobreoferta, sin embargo no se llevó a cabo por situaciones externas que no tienen relación al trámite adelantado en aquella oportunidad, como lo era la falta de recursos del tutelante para cumplir la obligación a él impuesta (hechos sexto y séptimo).

En suma de lo anterior, se acota lo descrito por la Secretaría de Movilidad quien al descorrer el traslado indicó, manifestación que se entiende rendida bajo la gravedad del juramento, que el *“...el trámite de reposición y el de postulación a la compra de vehículos por parte del Fondo de Mejoramiento del Factor de Calidad del Servicio, no requieren ejercicio del derecho de contradicción del solicitante, pues como se expone, son trámites en los que media una petición y se verifica el cumplimiento de unos requisitos para aprobar el acceso o no a él, sin embargo, el ciudadano cuenta con la herramienta del derecho de petición en todo tiempo, que como el caso en concreto, se ejerció constantemente por el actor, siendo resueltos oportunamente, al punto que el actor cayó en lo consagrado en el artículo 19 de la Ley 1437 de 2011”*.

De igual forma, no se evidencia la vulneración del trabajo e igualdad deprecados por el señor Bejarano como quiera que no se acreditó de qué manera la negativa

⁴ **Artículo 1º.** Los propietarios de vehículos de servicio público colectivo de radio de acción metropolitana, distrital o municipal que cumplieron o cumplan el ciclo de vida útil de acuerdo con la ley, tendrán plazo hasta el 15 de diciembre del año 2005 para hacer efectiva la reposición de su equipo automotor, efecto para el cual las empresas les conservaran la disponibilidad de la capacidad transportadora.

de la reposición del automotor de placas SAG-654 impide que el petente pueda acceder a otras fuentes de ingreso o qué definitivamente esa era su única fuente de ingresos, situación que se pone en duda como quiera desde el año 2015 como se expuso en líneas precedentes ha venido presentando diferentes peticiones en pro de obtener la reposición del automotor, luego no podría predicarse dicha afectación máxime cuando ha transcurrido todo ese tiempo, sin haberse incoado acción en tal sentido, sólo hasta este año, entonces, se itera, no podría decirse que no cuenta con más recursos para sustentar sus necesidades básicas, aunado a esto, el derecho a la igualdad tampoco se ve quebrantado, pues si bien en el escrito de tutela expone unas referencias de unas demandas constitucionales que fueron estudiadas en los años 2009 y 2010 que a su parecer considera que son iguales a la hoy presentada, no se aportó prueba con la cual se llegue a la conclusión que definitivamente se relacionan con la problemática que aquí se presenta, y así determinar que se quebrantó su derecho a la igualdad.

Relativo al perjuicio irremediable⁵ no se evidencia su configuración, pues si bien, en el escrito inicial se señaló que es una persona de escasos recursos, lo cierto es que no es un argumento suficiente para despachar favorablemente esta acción de tutela, en cuanto al amparo del debido proceso para que en su lugar la entidad encartada autorice la reposición del rodante de placas SAG-654, y la adquisición de los derechos de reposición del mencionado automotor para su reposición o cuota de chatarra, puesto que es un asunto que debe ser zanjado ante las instancias Ordinarias, además, este mecanismo se interpuso a través de apoderado judicial, luego ligeramente no podría decirse que su mínimo vital está siendo segregado.

Finalmente, y al no encontrarse quebrantando los derechos fundamentales del accionante, el Despacho se abstiene de pronunciarse respecto al concepto de la propiedad privada.

En conclusión, se despachará adversamente el resguardo invocado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO CINCUENTA Y SIETE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley;

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR el amparo invocado por el señor **JOSÉ TECLO BEJARANO**, por las consideraciones anteriormente expuestas.

⁵ Sentencia T-222 de 2014, "...De acuerdo con la Constitución, específicamente con el artículo 86, la acción de tutela solo procede cuando la persona carezca de otro recurso judicial para defender sus derechos. Así, la mencionada disposición, establece que toda persona podrá reclamar ante los jueces "la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión" de autoridades públicas o particulares, siempre que el peticionario "no disponga de otro medio de defensa judicial". Lo anterior, sin perjuicio de que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Esta regla se conoce como el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela".

SEGUNDO: NOTIFICAR esta determinación a las partes por el medio más expedito.

REMITIR: REMITIR oportunamente las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si el fallo no fuere impugnado.

NOTIFÍQUESE,

**MARLENNE ARANDA CASTILLO
JUEZ**

Firmado Por:

**MARLENE ARANDA CASTILLO
JUEZ MUNICIPAL
JUZGADO 057 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

a692d744d365fe60fbde5570c45d6c8ec846228770244ff4f6dc1a608d1cf2a8

Documento generado en 23/10/2020 12:35:39 p.m.

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**